

Remesas, consumo y desarrollo humano: evidencias de la dependencia de México

(Recibido: julio/012–aprobado: diciembre/012)

*José Luis de la Cruz Gallegos**

*José Antonio Núñez Mora**

Resumen

El presente estudio analiza las relaciones de largo plazo existentes entre los ingresos por remesas, los principales elementos que conforman el consumo privado en México y el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Dado que la migración muestra la necesidad que algunos mexicanos tienen para encontrar los recursos suficientes en el mercado laboral nacional, el análisis hace una revisión de la situación económica de México, infiriendo que de la crisis del modelo económico es natural pensar que la migración internacional es una de las opciones que los connacionales tienen para buscar resolver sus problemas. No obstante, ello implica que cuando los migrantes envían las remesas a México, pueda existir una dependencia en términos de bienestar y desarrollo humano. Para estudiar dicha dependencia se desarrolla un vector de corrección de errores, el cual es capaz de capturar las interrelaciones causales de largo plazo que existen entre las variables. Como resultado se encuentra la presencia de una causalidad positiva que va de las remesas hacia los componentes del consumo privado y hacia el IDH, situación relevante para establecer la dependencia que una parte del bienestar de la población tiene sobre los flujos que por el concepto de remesas llegan al país.

Palabras clave: consumo, remesas, causalidad.

Clasificación JEL: C32, D12, E21, F24.

* Profesores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México (jldg@itesm.mx) (janm@itesm.mx).

Introducción

Las recurrentes crisis que durante las últimas décadas han asolado a la economía mexicana, así como los profundos cambios estructurales implementados durante el mismo periodo, son parte importante de explicación que permite entender las causas de la migración de mexicanos hacia EUA. Un entorno macroeconómico de bajo desempeño es la fuerza motriz de dicha situación, principalmente porque entre 1981 y 2008 el PIB creció a una modesta tasa promedio anual de 2.6 %. En términos per cápita, el crecimiento económico reportado apenas alcanza a superar ligeramente al incremento de la población.

Vinculado con dicha situación es evidente, que el mercado laboral mexicano no ha sido capaz de atender las necesidades de trabajo formal y bien remunerado que tiene la sociedad, además los salarios reales se han visto fuertemente merma- dos por las presiones inflacionarias. La importancia del empleo rebasa el ámbito económico y trasciende a lo social y a la seguridad nacional. Un empleo estable, capaz de generar el ingreso económico suficiente para las familias, es una condición necesaria en el desarrollo social. Por ello, impulsar el crecimiento de los sectores económicos que conforman el aparato productivo es prioridad en toda estrategia de política económica. En este sentido, el hecho de que en los últimos veinticinco años el modelo económico mexicano no fue capaz de propiciar la generación del empleo necesario para la población, sin duda reviste uno de los mayores escollos en la historia del país y lo coloca lejos de generar el famoso millón de empleos anuales que tan sólo por natalidad necesita el país.

En materia de empleo, los trabajadores registrados en el IMSS pasaron de 10.3 millones en 1997 a 14.3 millones en 2008. En otras palabras, es evidente que en promedio durante los últimos 11 años se registraron únicamente 360 mil empleos adicionales por año, cifra lejana al millón necesario tan sólo por crecimiento de la población. De igual forma, la calidad del empleo fue bastante crítica aún antes de la crisis, ya que para fines de 2007, 2.5 millones de personas ganaban menos de un salario mínimo, 12.8 millones de personas tenían trabajo pero sin acceso a un sistema de salud, 11 millones más no tenían otras prestaciones y 13 millones de trabajadores realizaban su labor sin un contrato escrito.

Además debe citarse que, si bien la política de control inflacionario fue parte esencial en la estabilización económica, además la contención salarial disminuyó el poder de capacidad de compra de los trabajadores. De acuerdo con la información de la *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*, la población con menores ingresos percibe la parte más importante de sus recursos monetarios vía el trabajo remunerado. Por tanto, la ausencia de empleo o la caída

del poder adquisitivo del salario, constituyen una afectación a su capacidad de consumo y con ello de su bienestar.

Como ejemplo de la gravedad de lo anterior, se tiene que la *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008* (ENIGH-2008) señaló que entre 2006 y 2008 existió una reducción en los ingresos corrientes de los hogares por aproximadamente 1.6% en términos reales. En la parte clasificada como ingreso corriente monetario (integrado por las remuneraciones al trabajo subordinado, ingresos por trabajo independiente, otros ingresos provenientes del trabajo, renta de la propiedad, transferencias y otros ingresos) pudo observarse que el incipiente incremento de 0.6% básicamente fue atribuible a que las personas obtuvieron mayores recursos por trabajo independiente, los cuales pasaron de 3,181 a 4,680 pesos (47% adicional).

Dado que los ingresos por trabajo subordinado y las transferencias prácticamente se mantuvieron sin cambio (0.6 y 0.9% respectivamente), mientras que las rentas de la propiedad se desplomaron 46.4%, puede afirmarse que los hogares mexicanos se han visto en la necesidad de realizar actividades económicas de autoempleo, ocupaciones que en muchas ocasiones se encuentran relacionadas a la economía informal o microempresas, en donde la última opción tiene escasas posibilidades de éxito sostenido. Además puede afirmarse que la mayor contribución de este tipo de actividades económicas, es la de generar recursos monetarios para las familias que las desempeñan, pero en donde el valor agregado nacional y los pagos tributarios que de las mismas se desprenden son prácticamente inexistentes.

Igual de preocupante fue el resultado correspondiente a los ingresos no monetarios, ya que salvo el incremento en el autoconsumo (1.6%), el resto de sus componentes manifestó retrocesos significativos: las remuneraciones en especie de -6.1%, las transferencias en especie de -21.7%, las estimación del alquiler para la vivienda -2.5%, lo cual deja a varias de ellas en niveles similares a las del año 2000.

En esa misma dimensión se encuentra la evidente la disminución del poder adquisitivo en México: el salario mínimo real perdió 50% de su valor en el periodo comprendido entre 1987 y 2004. De igual manera. la información publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales de EUA permite observar que, en 2007 los costos laborales de manufacturas en México representaron únicamente 13% respecto a los de EUA, cifra muy inferior a 23% que alcanzaron en 1975. Las implicaciones de crisis social que ello representa son evidentes, pero debe adicionarse que no constituyen una característica de la reciente recesión, sino que representan un problema estructural de México en los últimos 30 años (Cruz, 2008: 1-11).

En dicho entorno económico, y dada la ubicación geográfica de México, no es difícil entender que una parte de la población buscase migrar hacia EUA. Para el

año 2007, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) estimaba que 11.8 millones personas nacidas en México habitaban en alguna ciudad de EUA, representando con ello más de 10% de la población de nuestro país.

En general, se tiene evidencia de que parte de los incentivos migratorios han sido la búsqueda de trabajo y los mayores salarios que se pueden percibir en EUA, principalmente para un amplio espectro de personas con bajo nivel de escolaridad. No obstante, debe citarse que dicho patrón se está modificando. En la actualidad, la debilidad del mercado laboral nacional, ha provocado que parte de la población calificada también vea a EUA como una opción para encontrar un ingreso laboral superior, hecho explicado por las elevadas tasas de desempleo que enfrentan las personas con un mayor grado de escolaridad.

En este sentido, el presente estudio busca establecer si las remesas tienen un impacto en el bienestar de la población. Para ello, la aproximación metodológica utilizada es la de los vectores de corrección de error (VEC), en donde se estudia la causalidad en el sentido de Granger para determinar si las remesas (REM) que desde el exterior envían los mexicanos, el consumo privado (CPR) y el IDH que publica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tienen una relación de largo plazo. Básicamente se busca establecer la existencia y dirección de las diversas interacciones que dichas variables tienen entre sí, a fin de observar si las remesas influyen sobre el bienestar de la población.

1. La crisis del modelo económico

Los resultados electorales de 2006, las subsecuentes inconformidades y protestas, así como el deterioro institucional que ha seguido a dicho acontecimiento, son el resultado de un proceso social inmerso en una profunda ruptura económica y cultural. El año 2006 presentó a un país con marcadas heridas sociales, que trastocan los derechos humanos supuestamente universales, prerrogativas que teóricamente deberían estar garantizadas por las leyes e instituciones nacionales, todos ellos cuestionados por una profunda crisis económica, política y de seguridad nacional. La posibilidad de comparar a regiones de estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, por mencionar algunos, con países estructuralmente denostados por el flagelo de la pobreza, como Haití, presenta la prueba viviente de que en las últimas décadas, los sucesivos gobiernos y su clase política han fracasado en la atención eficiente y oportuna de las necesidades de los mexicanos marginados.

No obstante los hechos, en 2006 todo esto fue nublado por las campañas propagandísticas negras, llenas de imágenes y escasas de contenidos, lejanas de soluciones reales pero cercanas a generar miedos y odios. La intervención de cúpulas

empresariales, del propio presidente de la república, de campañas similares, otras campañas, las profundas divisiones internas, el alejamiento de viejos liderazgos desplazados, izquierdas meramente electorales, incorporaciones oportunistas, corrupciones que tocaron círculos íntimos, así como errores de los principales contendientes, terminaron por descomponer la coyuntura social de México. Sin embargo, ¿es esto suficiente para segmentar de manera tan evidente al país?

Desde un punto de vista que revise la evolución económica y social de la nación no parece ser así. En el campo económico, no puede olvidarse que durante más de cien años una parte sustancial de los desarrollos de infraestructura se ha dirigido hacia el norte y a los puertos de México, muchas veces en aras de favorecer el comercio internacional, especialmente con EUA. Asimismo, en el proceso de industrialización de las últimas décadas, las regiones más favorecidas han sido precisamente aquellas referidas a las actividades económicas tendientes a satisfacer las necesidades de consumo del vecino país del norte, proceso en donde las inmensamente ricas regiones del sur y sureste han estado marginadas. La segmentación de votos así observada (que no excluye otras posibilidades sociales y políticas), permite introducir un elemento de análisis económico, el cual es pertinente para resaltar las interrelaciones que se han cimentado y profundizado en la sociedad mexicana, algunas de ellas explican las severas contradicciones que se han gestado en la evolución del país, procesos fuertemente exacerbados durante la campaña electoral de 2006. En este punto es imprescindible citar que los lazos productivos, comerciales y de inversión que la fabricación de manufacturas ha permitido establecer entre México y EUA no tienen candados de fidelidad, y muestra de ello es la historia del nuevo milenio: entre 2001 y 2003 una parte sustancial de empresas trasnacionales se mudó hacia China, provocando que nuestra nación fuese desplazada a un tercer lugar como proveedor del mercado norteamericano, afectando la evolución del empleo y la inversión en México, situación que plantea un nuevo desafío para la nación: ante la marcada dependencia que se tiene del ciclo económico norteamericano y de los flujos financieros que del mismo provienen, y ante la fuerte irrupción de competidores internacionales que debilitan la posición de México en el mercado de EUA, ¿cómo enfrentará el país las contradicciones económicas y sociales generadas por un modelo económico que no corresponde a la realidad social de la nación?, ¿qué camino se seguirá para asegurar la estabilidad y viabilidad del Estado mexicano?

1.1 México 2009: un país en recesión

La declaración de recesión económica realizada por el secretario de Hacienda oficializó la magnitud del problema que desde mediados de 2008 ha vivido el país.

Dicha aseveración fue acompañada con una perspectiva de crecimiento económico negativo significativamente diferente al planteado originalmente por el propio Gobierno Federal.

Lejos quedaron sus pronósticos originales para la elaboración del presupuesto de 2009, en donde se estimaba un incremento del PIB de 3%. A partir de ese momento, las proyecciones gubernamentales han sufrido repetidas correcciones que han llegado al extremo de plantear una contracción económica cercana a 5.5%, la más grande desde la crisis de 1995. No obstante, estimaciones del Banco de México y de otros analistas colocan la perspectiva de la contracción en niveles de entre -7.0 y -8.0%, señalando con ello la magnitud del deterioro económico.

Si bien la incertidumbre que se genera por el hecho de que la autoridad económica realice reiteradas modificaciones a la baja en sus expectativas es algo preocupante, lo que más inquieta son sus implicaciones sobre la sociedad mexicana, principalmente en materia de empleo, pobreza, seguridad pública, salud y educación.

La problemática que se enfrenta es compleja, particularmente por el hecho de que el sector privado afronta a un entorno poco propicio para la inversión, la producción y la generación de empleo. La afectación de las empresas es general, tanto las grandes como las pequeñas encaran la posibilidad de quiebra aunque por diversos motivos.

En general se puede señalar que algunas de las más grandes empresas se equivocaron en su manejo financiero, fundamentalmente por el manejo inadecuado de los derivados financieros del tipo de cambio. El sector automotriz exportador, sufrió una severa caída debido a la recesión industrial que ocurrió en EUA, mercado al cual se dirige una parte sustancial de la producción realizada en México. Al igual que en el caso anterior, se tiene a la industria exportadora de bienes eléctricos, electrónicos, mecánicos, de computación, textiles, entre otros, la cual no tiene capacidad de reacción ante el histórico retroceso de la inversión y el consumo en el mercado norteamericano.

Por tanto, se puede plantear que las empresas dedicadas a satisfacer la demanda del mercado interno también enfrentan los impactos que inicialmente acontecieron en EUA. La pérdida de empleo en las empresas de manufacturas disminuyó de manera acelerada la capacidad de consumo de la población en general. Además con la mengua de las remesas, la contracción del crédito al consumo, la volatilidad del sector financiero, la depreciación del peso, el incremento de la inflación, principalmente, han ocasionado que el sector servicios, el último reducto de estabilidad económica, también se haya visto fuertemente afectado.

La relación con el mercado interno es clara, fundamentalmente porque la mayor proporción de los servicios tiene un estrecho vínculo con la evolución de los patrones de consumo de la población, por lo que su tendencia a la baja sin duda señala una disminución en la calidad de vida de los mexicanos.

En el fondo los problemas que se enfrentan tienen una larga historia, ya que si bien es cierto que la actual crisis económica se originó en el extranjero, también lo es, el que se reproduce en un sistema económico poco productivo y con un pobre desempeño social.

Al escenario anterior debe agregarse una coyuntura de salud que igualmente mostró la precaria estabilidad social que se vive en el país, y es que a la recesión económica previa debió sumarse el efecto de la crisis por la influenza. La necesidad de cerrar el sistema educativo a nivel nacional, de una parte sustancial de la actividad comercial en el Distrito Federal y en algunas otras entidades, tuvo el beneficio de un control en la expansión de la epidemia pero a un costo económico que todavía no es posible cuantificar.

La vuelta a la normalidad antes de la influenza no es homogénea, estados como Jalisco, Chiapas, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán y Guerrero han debido postergarlo, especialmente porque el surgimiento de nuevos casos todavía no permite pensar en que el riesgo de contagio se ha eliminado.

El sector turismo también se vio dañado, la cancelación de cruceros, vuelos chárter y vuelos comerciales han sido comunes, principalmente desde países como Argentina, Cuba, China y Ecuador. De igual manera, la recomendación que algunos países han emitido para que sus connacionales no viajen a México es un hecho negativo que debemos enfrentar, y al que se agrega la poca disposición del sector para disminuir sus precios para con ello motivar al turismo de origen nacional. En su conjunto todo ha afectado a un sector altamente generador de ingresos, y que en algunas regiones es la fuente cardinal de trabajo y riqueza.

Ante todo esto la postura del gobierno federal ha sido tibia. Dejando de lado la parte diplomática para defender los derechos de los mexicanos en el extranjero, debemos centrarnos en la parte económica. Históricamente México ha sido un país solidario con América Latina y China, desde las épocas de la migración internacional que las dictaduras sudamericanas provocaron hacia nuestro país, el soporte a la inclusión del país asiático en la ONU y la nueva migración de sudamericanos hacia México en épocas de las más recientes crisis económicas. El extremo lo representa el rechazo al embarque de ayuda humanitaria que se envió hacia Haití, una nación que ha sido apoyada de manera sistemática por México. De igual forma, la exclusión de la feria internacional a realizarse en China, en donde nuestro país era uno de los invitados principales reflejan algunas de las afectaciones que se

están viviendo a nivel internacional, y en donde todas ellas obligan a pensar en la eficacia de nuestra diplomacia política y comercial a nivel internacional.

Las limitantes actuales del Estado mexicano tienen origen en la necesidad política de presentar escenarios positivos poco cercanos a la realidad, prospectivas que ahora afectan sus ingresos fiscales y con ello su capacidad de soportar la actividad económica nacional.

Como ejemplo se puede plantear que en la ley de ingresos para 2009 se estimó que el Gobierno Federal recaudaría 1.9 billones de pesos, de los cuales 1.2 serían por impuestos. El IVA (490 mil millones), el ISR (596 mil millones) y el IETU (55 mil millones) representarían las principales fuentes de recursos tributarios para el gobierno. A lo anterior, se sumarían 714 mil millones por derechos, en donde 700 mil se relacionan con los hidrocarburos. Dado que existió un error en la proyección de crecimiento económico (el escenario final se realizó con una estimación de crecimiento de 1.8%), no es de extrañar que ahora las cuentas no cuadren. Por ejemplo, se tiene el resultado de crecimiento económico que arrojó el PIB en el primer semestre: una disminución cercana a -9 %.

Lo anterior implicó una caída en términos reales de los ingresos del gobierno federal (-23.7%) durante el primer trimestre, en donde la recaudación de IVA (-21.2%) e ISR (-11.3%) se encuentran acordes con la debilidad económica antes planteada. No obstante, también debe mencionarse que el problema recaudatorio se profundizó en marzo cuando los ingresos del gobierno federal disminuyeron 37.5% en términos reales, en donde el desempeño del IVA (-20.2%) e ISR (-19.8%) fue decepcionante.

No es de extrañar que ante la presencia de un entorno económico adverso el gobierno federal, y en general todo el sector público, existiera la necesidad de recurrir a deuda para enfrentar la crisis, pero en donde la cuestión de fondo versa sobre si su ejercicio podrá generar el crecimiento económico suficiente para poderla pagar en el mediano y largo plazo.

El problema de endeudamiento no es menor, para marzo de 2009 el acervo de deuda del sector público contabilizaba 3.6 billones de pesos, es decir, 1 billón de pesos más que en diciembre de 2008, representando 32.4 % del PIB. La deuda externa volvió a representar el problema histórico que fue a principios de los años ochenta del siglo pasado, al superar los 83.9 mil millones de dólares.

Tal es el punto álgido en el cual nos encontramos, donde los programas de rescate e infraestructura anunciados por el gobierno en meses pasados no han logrado detener la caída, mostrando con ello la ineficiencia de su operación en el corto plazo.

Por tanto, el desafío que el país enfrenta es complejo, donde los espejismos no sirven para resolver los profundos problemas de México, la solución radica en la generación de programas económicos, políticos y sociales que tengan su raíz en la realidad, y cuyo objetivo sea la elevación de la calidad de vida de la población en general.

El argumento oficial ha sido de que la crisis viene de fuera y que por lo tanto, una vez que termine ello implicará una mejora del entorno nacional, situación que pareciera no del todo cierta.

1.2 El entorno económico nacional: una visión crítica

De manera rutinaria, los políticos, economistas e intelectuales vinculados con la actual superestructura, aseveran que mediante la implementación de una serie de nuevas reformas estructurales, se abrirá la posibilidad de obtener un mayor crecimiento y desarrollo económico. No obstante, en la revisión de la evolución del México contemporáneo debe puntualizarse que, la principal contribución a la precaria situación económica y social no sólo puede atribuirse a los tiempos en donde el Estado propietario de los medios de producción actuó de manera irresponsable tanto en el manejo del gasto público, como en el desafortunado endeudamiento externo que el mismo implicó.¹ En estos momentos, debe precisarse que la responsabilidad de la situación económica actual, también es atribuible a la aplicación de un modelo económico de libre mercado depredador, en donde más que la transformación social y democrática del país, en el espíritu de la constitución,² se ha priorizado la búsqueda por dotar de una nueva funcionalidad a los esquemas de poder político y económico prevalecientes.

En este aspecto, ante el desmantelamiento del Estado propietario, el impulso productivo forzosamente recae en el sector privado, ente que debe adquirir un mayor dinamismo, ello es requisito ineludible para adaptarse a entornos de mayor apertura y competencia económica. Algo realmente paradójico se encuentra en el hecho de que, desde el poder público se promovieron una serie de cambios estructurales supuestamente enfocados a favorecer una mayor competencia nacional e internacional, pero en donde no se atendieron adecuadamente los requerimientos productivos y de infraestructura que tenía un sector privado gestado bajo una economía cerrada, de baja innovación tecnológica y administrativa, con grandes

¹ Entre 1972 y 1984 la deuda externa pasó de 7 a 92 mil millones de dólares (Fernández, 1997: 133-155).

² De acuerdo al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se tiene a la democracia “[...] no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

empresas cobijadas por un poder monopólico u oligopólico, factor económico que no les potenciaba para competir favorablemente con empresas internacionales altamente productivas y eficientes. Lo previo, sin duda alguna, tiene intrínseco un par de factores que parecen no haber sido dimensionados por los pioneros de la globalización del sistema económico financiero mexicano, y se refieren tanto a la competitividad como a la productividad. Esto, señala una contradicción esencial: ¿es posible concebir que el país tenga los cimientos adecuados para impulsar su economía bajo un modelo de libre mercado sin contar con la suficiente competitividad y productividad?, y aún más interesante, si el modelo económico mexicano no es capaz de competir ¿cómo logrará alcanzar el objetivo superior de aumentar el bienestar social de la población?

A fin de evaluar el impacto social de la inconsistencia planteada, es necesario citar algunas interrelaciones económicas importantes que durante los últimos años se han conformado en el país, precisamente porque permiten delimitar las incongruencias propias del modelo, y con ello observar la imposibilidad de que con las políticas derivadas del mismo se pueda alcanzar un objetivo de igualdad social. Primero, son evidentes los alcances de la política económica aplicada desde la década de los ochenta: una apertura comercial orientada al sector manufacturero, especialmente hacia la maquila,³ en donde a pesar de todos los tratados y acuerdos comerciales, EUA continúa siendo el principal mercado para las exportaciones nacionales.⁴ Una desregulación financiera que ha buscado privilegiar los flujos de inversión privada extranjera; una extensa privatización de los sectores productivo y financiero; la obtención de un “equilibrio” fiscal con base en la disminución del gasto social y productivo, cuya consecuencia natural tiene una cuestionable estabilidad macroeconómica e inflacionaria.

Debe resaltarse que en la implementación de todas las medidas anteriores, se ha encontrado la recomendación y conducción de instituciones y gobiernos internacionales, así como de los agentes nacionales ligados a su ideología. Pero, después 25 años de haberse iniciado este cambio estructural es deber preguntarse: ¿el nivel de vida de los mexicanos se ha constituido en uno que permita garantizar la estabilidad social del país? En el terreno económico es necesario establecer el cuestionamiento en un sentido más amplio e interrogar sobre si las múltiples reformas estructurales aplicadas desde la década de los años ochenta han encaminado al país hacia una nueva generación de progreso y desarrollo, especialmente para el caso del mexicano históricamente marginado. En este sentido, gran parte de la problemática

³ Variable, que hoy ya no se desglosa en las estadísticas oficiales del comercio exterior mexicano.

⁴ Para 2006 cerca de 85 % de las exportaciones totales de México se dirigió al mercado de EUA.

actual se explica porque la relación industrial con EUA no se ha trasladado hacia la economía no exportadora, la cual permanece al margen de los flujos de inversión extranjera directa (IED) que llegan al país, recursos que se encuentran enfocados hacia el sector manufacturero y, coyunturalmente, al financiero.⁵

La inversión en maquinaria y equipo se ha concentrado en la actividad industrial de exportación, sin generar los encadenamientos productivos y las economías de escala que se pregonaban como objetivo antes de la apertura comercial. En este proceso, la maquinaria y equipo de origen nacional ha sido desplazada, provocando que durante los últimos años su participación en el aparato productivo nacional se haya contraído de manera significativa.⁶ Paradójicamente, este argumento implica que el mercado interno, de más de 100 millones de personas, es insuficiente para preservar una significativa tendencia positiva de crecimiento, que a su vez sea relativamente independiente de la economía norteamericana, situación que constituye un grave problema estructural. En particular, dicho aspecto refleja y resalta la limitada capacidad de compra de la población, situación que en el largo plazo está restringiendo la gestión empresarial nacional, sector económico que adicionalmente se encuentra expuesto al desafío competitivo de otros países manufactureros, principalmente de China.

Después de la recesión norteamericana de 2001, es indudable que el país más privilegiado en dicho mercado ha sido China.⁷ Por tanto, puede afirmarse que la dependencia industrial mexicana no necesariamente se tradujo en un encadenamiento generador de productividad y competitividad,⁸ y mucho menos en una fuente de innovación tecnológica y desarrollo para toda la economía, mecanismos que hoy son necesarios para enfrentar a las economías que tienen importantes ventajas comparativas en costos laborales bajos, en planeación económica o de capital humano, como lo son China, Brasil, India y Rusia. El argumento citado representa una de las mayores contradicciones que pueden encontrarse en el modelo económico del país, esencialmente porque el *laissez faire, laissez passer* tiene como principal paradigma a la competencia, y por tanto, los esfuerzos para implementar debidamente las

⁵ Entre 1994 y 2006 más de 73 % de la IED se ha concentrado en manufacturas y servicios financieros.

⁶ Mientras que la inversión en maquinaria y equipo total creció casi 107 % entre 1993 y 2006, en el mismo periodo la parte nacional solamente lo hizo en 25 %.

⁷ China cuenta con una fuerza laboral de más de 700 millones de personas, tasas de crecimiento superiores a 9% en los últimos 25 años, una IED que en 2006 superó los 63 mil millones de dólares y un sector de las manufacturas que ocupa a cerca de 80 millones de personas.

⁸ De acuerdo al Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 58 en términos de competitividad, mientras que por tamaño del PIB, el Fondo Monetario Internacional lo coloca en la posición 14. De lo anterior podríamos inferir que México es un país grande pero no eficiente.

reformas estructurales debieron prodigarse en esta dirección. En contra de esta idea, se aprecia el continuo incremento que la demanda del sector productivo nacional tiene por bienes intermedios foráneos. Para 2004 las compras de bienes intermedios extranjeros superaron los 149 mil millones de dólares, en 2005 se elevaron a más de 160 mil millones y para 2006 la cifra superó los 188 mil millones de dólares.⁹ Todo esto limita la producción e innovación nacional, y su solución reclama un decidido apoyo a la creación de mecanismos públicos y privados que procuren mejoras en productividad, competitividad y encadenamientos de la industria mexicana.

Sin embargo, y a contracorriente con esta necesidad, en la década de los ochenta se manifestó una fuerte disminución de la inversión pública y privada que, en el caso de la primera, se prolongó hasta la década de los noventa y principios del nuevo siglo.¹⁰ El resultado de todo ello ha sido un gradual y silencioso desmoronamiento de la infraestructura física y humana requerida tanto para la producción, como para el transporte de insumos, bienes y mercancías. Debe citarse que en los últimos años ello ha implicado un fracaso preocupante: la generación y supervivencia de empresas ha sido marginal.¹¹ En términos macroeconómicos los logros son modestos: desde 1982 se han registrado cinco años con crecimiento negativo, así como cinco ubicados entre 0 y 2 %, situación que por sí misma simboliza el magro alcance de los “frutos” de aquellos agentes encargados de la economía nacional, algo que puede resumirse en el hecho de que entre 1982 y 2006 la economía únicamente ha crecido un 2.5 % en promedio anual. El argumento representa un punto apremiante, principalmente porque muestra que la mayoría de las actividades productivas se desempeñan con un diseño urbano desordenado, reactivo y que en lo fundamental debe su origen y existencia al pensamiento y lógica del México generado hace más de treinta años por el “desarrollo estabilizador”, algo poco congruente con la filosofía competitiva del libre mercado, línea de pensamiento que se encuentra ávida de dinamismo, infraestructura e innovación tecnológica privada.

De manera adicional, el ejercicio del gasto de gobierno sirve para citar otra importante contradicción. Primero, puede aludirse que en 2005 ingresaron de forma excedente a lo presupuestado más de 100 mil millones de pesos, de los cuales únicamente se ejerció 6.5 % en inversión física, es decir en construcción o en

⁹ Las importaciones citadas, superan el valor del PIB individual de casi todos los países de América Latina, excepto Brasil y Argentina (Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database).

¹⁰ Entre 1980 y 1989 la inversión pública disminuyó casi 50% en términos reales, mientras que en el periodo comprendido entre 1989 y 1999 la contracción fue de 1.5%.

¹¹ Las empresas exportadoras pasaron de 20 a 40 mil entre 1993 y el año 2000. Sin embargo, en 2005 el número se redujo a 37,500, situación que indica la pérdida de dinamismo en el mecanismo exportador.

maquinaria y equipo.¹² Pero, si ya se habían cumplido las metas presupuestarias, ¿por qué el gobierno decidió erogar la mayor proporción en un gasto corriente que no genera crecimiento? Si el discurso oficial es de mejorar la infraestructura del país, ¿por qué el ejercicio del presupuesto no se es consistente con ello?

Bajo la misma premisa, también es claro que la inversión privada no ha sido suficiente para sustituir los beneficios de un gasto de gobierno orientado a la generación del capital físico y humano necesario para enfrentar la nueva agenda global. Además, la falta de estrategias adecuadas emanadas desde las esferas del poder político, aún con gobiernos de sesgo empresarial, han causado serios problemas a la economía nacional. Como muestra de lo anterior, puede pensarse en la idea fallida de generar crecimiento y empleo mediante el concepto conocido como “changarros”. Con estas “nano” empresas, el Gobierno Federal entre 2001 y 2006 pretendió resarcir la carencia de empleo formal, bien remunerado, de las décadas anteriores.¹³ Un ambicioso, e irreal objetivo adicional, era que por medio de estas empresas se buscaba obtener los incrementos de productividad, competitividad e innovación tecnológica necesarios para competir a nivel mundial. Dicha situación contrasta con la exitosa estrategia de países como Corea del Sur, India, China o Singapur, naciones de una creciente influencia tecnológica, manufacturera y financiera, logros esencialmente alcanzados mediante crecientes inversiones públicas y privadas en ciencias puras y aplicadas.

En cuanto a las privatizaciones debe citarse que varias no alcanzaron el éxito esperado, entre ellos los casos carretero, azucarero y bancario son los más representativos. En el último tema, los efectos continúan siendo perniciosos para la economía nacional y la razón es sencilla de entender: el esquema derivado del rescate bancario reclama una creciente oleada de recursos financieros que rápidamente han superado a los flujos orientados al beneficio social y a la creación de obra pública. En este aspecto es realmente paradójico que los sucesivos gobiernos y sus principales actores políticos, realicen una apología y defensa a ultranza de la conveniencia de sostener el esquema y proceso del rescate bancario, mientras que se muestran altamente sensibles a los supuestos efectos negativos que en las finanzas públicas puede tener un potencial aumento del presupuesto destinado a rubros sociales prioritarios como la educación o la salud.¹⁴ En aras de lograr un cabal en-

¹² El problema continúa en 2007, de acuerdo al informe de las finanzas públicas correspondiente al primer trimestre de este año se puede observar una contracción en el gasto programable destinado a la acumulación de capital, algo contrario a las necesidades de infraestructura de México.

¹³ Desde diciembre de 2000 y hasta noviembre de 2006 el IMSS únicamente registró 211 mil trabajadores más en promedio anual.

tendimiento de la precaria situación de las finanzas públicas, se reconoce que a la suma de estos nuevos pasivos, fruto de los tiempos de reformas estructurales, debe agregarse la deuda externa generada como saldo de las políticas y desequilibrios incubados en la década de los años setenta.

La conjunción de ambos hechos da como resultado un entorno de pesado endeudamiento público, en donde la voluntad política de privilegiar el pago a los acreedores ha comprometido el presupuesto y la orientación de la política económica, presionando para generar mecanismos de gasto que por sí solos también han comenzado a ser fuente de nuevas presiones presupuestarias. Un ejemplo representativo son los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), esquema que tiene su origen en el concepto de generar inversión en Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y el sistema carretero, todo ello mediante una arquitectura que en esencia es financiamiento privado. En principio, los proyectos enmarcados bajo los PIDIREGAS deberían ser autofinanciables, no obstante, en los últimos años se erogaron cerca de 40 mil millones de pesos anuales en pago de amortizaciones por este concepto, gastos que no permiten detener el incremento del endeudamiento total, algo totalmente contradictorio y no previsto en la concepción original de los PIDIREGAS.¹⁵

Adicionalmente, en el caso del FOBAPROA–IPAB, como en la mayoría de todos los rescates, nuevamente debe repararse en la inconsistencia existente entre el discurso y la idea filosófica del libre mercado: por una parte, la libre competencia anuncia la desaparición de las empresas financieramente no rentables, acotando al mismo tiempo la intervención del Estado en la economía. No obstante, y de manera discrecional, en el pasado reciente se rescató a un sistema bancario privatizado poco antes. Ya saneados, los bancos fueron vendidos a instituciones financieras internacionales, dejando importantes ganancias para algunos propietarios privados y una terrible carga fiscal para la nación. Dicha situación no se ha generalizado hacia otros sectores productivos que atraviesan una grave crisis, como el textil, o a los propios programas sociales, educativos y de salud pública del Gobierno Federal. Llegado éste punto debe señalarse un problema básico en las políticas públicas nacionales, y es el que se refiere a la ausencia de una evaluación de su impacto, es decir: ¿cuál ha sido el efecto sobre el crecimiento de México, el bienestar económico de la población, la productividad, la competitividad, etcétera de todas estas estrategias?

¹⁴ Hasta marzo de 2007 los requerimientos financieros destinados al IPAB y los PIDIREGAS reclaman más de un billón 260 mil millones de pesos.

¹⁵ Véanse los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que desde 1997 existen y que para 2009 permiten establecer que los PIDIREGAS ya representan un débito superior al del IPAB-FOBAPROA y tuvieron que ser reconocidos como deuda.

La necesidad de implementar una política integral, que tenga al bienestar social de la población como su prioridad (y no a los mecanismos económicos de estabilización macroeconómica y control de la inflación), es fundamental, algo que se hace más patente en la coyuntura nacional contemporánea. Basta revisar la evolución de los precios entre 2001 y 2003, cuando el ciclo económico se encontró por abajo del potencial y existió un aumento en el desempleo. A pesar de ello, el Banco de México mantuvo la restricción monetaria, mientras que el Gobierno Federal permitía que los precios de la electricidad aumentasen muy por encima del promedio de la inflación.¹⁶ La explicación de este hecho contradictorio puede atribuirse a que desde el banco central se continuaba una política de férreo control inflacionario, aún a costa del crecimiento económico, mientras que para el Gobierno Federal se hacía importante buscar incrementar los ingresos fiscales, los cuales habían disminuido significativamente debido al estancamiento económico vivido en aquellos años. Por tanto, debe puntualizarse que precisamente en este ciclo recesivo, con una extraordinaria caída en el empleo generado, la política económica restringió aún más la actividad productiva, hecho que se tradujo en una prolongación de los factores que afectan negativamente al bienestar social del país.

1.3 Los problemas sociales, consecuencia natural del modelo económico

Fundamentado en lo anterior, es clara la razón de por qué no puede contrastarse el estado social que guarda país sin entrar en controversias. Por ejemplo puede citarse la información publicada sobre la disminución de la pobreza en 2004. De acuerdo con estas cifras, en ese año se reportó una considerable reducción en los índices de pobreza, algo que curiosamente se suscitó en un periodo de bajo crecimiento económico, un aumento sustancial en las tasas de desempleo, políticas fiscales y monetarias restrictivas, así como un gasto social relativamente menor a lo que se ejerce en otros países de la región latinoamericana.¹⁷ Este supuesto logro es significativo, ya que ante la falla del mercado para generar empleo, la escasa recuperación salarial y la poca eficiencia de lo que se mantiene del gasto social federal sus alcances son, al menos oficialmente, impresionantes. O por otro lado, y quizás más cierto, poco apegados a la realidad.

¹⁶ Entre febrero de 2002 y enero de 2003 los precios de la electricidad se incrementaron más de 30%.

¹⁷ Para el periodo 2002-2004, la línea de pobreza alimentaria reportó una disminución de más de 2 millones de pobres, cifra similar a la reducción de pobreza en capacidades, mientras que en la de patrimonio el resultado fue de una disminución de aproximadamente 1.4 millones de personas.

Debe citarse que la mayor parte de la recuperación en el empleo asociado al sector privado se ha dado en la parte eventual, y la afectación a las plazas laborales permanentes ha significado una pérdida en la seguridad de los trabajadores. Además durante el mismo periodo, el Gobierno Federal ha implementado una política enfocada a la reducción sistemática y significativa del sector público, es decir, que el empleo asociado al servicio público federal ha disminuido de manera gradual ¿cómo el mecanismo del empleo, público o privado, puede entenderse como una de las formas en las que la pobreza se ha reducido?, y si el gasto social tampoco es progresivo ¿por qué no ha disminuido este flagelo llamado pobreza? La respuesta tampoco puede encontrarse en una mejor distribución del ingreso, las cifras de la encuesta ingreso-gasto no permiten inferir dicha alternativa.

En la lucha contra la pobreza parece que las remesas internacionales comienzan a tener un peso específico mayor, aunque el problema es que la migración tiene su origen en la incapacidad de la economía para generar empleos bien remunerados, factor que habla mal del modelo económico de México, pero que indica algo importante: la falta de atención al problema de la pobreza se vincula con los conflictos sociales, políticos y de seguridad nacional que afectan al país, situación que es el verdadero desafío para las instituciones.

Una conclusión derivada del análisis presentado se refiere a que no es de sorprender la falta de estabilidad social, política y económica actual de México: el voto electoral no necesariamente ha garantizado el avance en la calidad de vida de la población marginada. En este sentido, la certidumbre que la democracia electoral debería generar para impulsar el desarrollo de México se diluye de manera silenciosa pero progresiva. Hoy se vive con un modesto crecimiento económico,¹⁸ en donde las crisis y estancamientos financieros no han sido erradicados del panorama nacional, y no ha existido una correspondencia entre los votos y el desarrollo económico y social. Debe aclararse que si bien no puede adjudicarse enteramente este problema a la cuestión electoral, sí puede reconocerse que el aumento de la pluralidad política de los gobiernos federales, estatales y municipales no ha llegado a transformarse en una mejor distribución del ingreso, o en un aumento significativo en los niveles de empleo o salario de los mexicanos.

En el México posterior a 2006, al enorme problema estructural de la falta de mejoras sustanciales en la calidad de vida de la gente más pobre, debe agregarse que el histórico rezago no únicamente fue incorrectamente encauzado por las instituciones y mecanismos electorales: a la falta de la vinculación citada, ahora

¹⁸ En concordancia con el bajo promedio antes mencionado, el reporte del PIB para el primer trimestre de 2007 fue de un incremento de 2.6%.

puede agregarse la existencia de un severo retroceso y cuestionamiento en el avance electoral observado antes del último proceso presidencial mexicano, ello limita las alternativas de una transición tersa. La razón de lo anterior radica en la polarización que el evento electoral ha generado, factor que viene tejiendo una simbiosis con los problemas económicos y sociales que el país está acumulando. Escrito de otra forma, el proceso electoral ha pasado de ser una válvula de escape (de una esperanza para la gente que busca elevar el crecimiento y desarrollo nacional mediante las instituciones creadas en el devenir histórico de México), a una dificultad más por solucionar, en una coyuntura donde la viabilidad del Estado mexicano se ve amenazada por la pobreza, el narcotráfico, la prostitución, la corrupción, la seguridad nacional y todos aquellos pendientes sociales que los últimos gobiernos han sido incapaces de resolver.

1.4 El desempeño agrícola en el entorno de crisis estructural

A raíz de la crisis de la deuda de 1982, y durante poco más de dos décadas, México adopta una política comercial basada en convenios de integración económica regional, preferencias comerciales geográficamente discriminatorias y reducción de las barreras comerciales en el marco multilateral, proceso denominado como regionalismo abierto. Hoy la economía mexicana es una de las más abiertas, con múltiples tratados comerciales que se traducen en bajos niveles de arancel y un flujo prácticamente libre de bienes y servicios. En este contexto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) formó parte del proceso que en teoría buscaba la modernización de la agricultura.

A partir de los tratados bilaterales México con EUA y Canadá, partiendo del reconocimiento de las asimetrías entre los sectores agropecuarios nacionales, nuestro país logró desgravaciones importantes para sus exportaciones, ampliando además los plazos de desgravación para algunos productos sensibles como el maíz y el frijol.

Sin embargo, la garantía de acceso a los mercados no es condición suficiente para la modernización agropecuaria de los países en desarrollo. Los resultados agropecuarios muestran claroscuros, algunos vinculados con el TLCAN, pero muchos más sustentados en problemas estructurales propios del campo mexicano.

El TLCAN propuso reformas en dos etapas para el sector agropecuario, una de 1994 a 2003, y otra de 2003 a 2008. Las acciones del PROCAMPO se articularon al mismo periodo.

En la primera etapa, se eliminan los cupos y aranceles para todos los productos provenientes de EUA, excepto maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, mismos

que continuarán con un esquema de arancel-cuota hasta el año 2008. La segunda etapa vence en 2008, con la desgravación total.

Es importante mencionar que en varias ocasiones, tanto los aranceles como los cupos de exportación para maíz y frijol fueron sobrepasados con los excedentes consiguientes y el derrumbe de los precios en detrimento de los productores nacionales.

Con la entrada en vigor de la desgravación del maíz y el frijol, el año 2008 se presentó como el de una coyuntura histórica para la relación comercial entre México, EUA y Canadá. Sin embargo, la trascendencia de ello no se circunscribe a una interacción meramente económica. La innegable vinculación entre la situación del campo mexicano con los segmentos de población que durante décadas han alimentado tanto la migración internacional hacia el vecino país del norte como la enorme migración interna dirigida a las grandes ciudades del país, abrieron la posibilidad de explorar las implicaciones sociales que puede tener el libre intercambio del maíz y el frijol. Dentro de los aspectos más importantes, debe mencionarse que es precisamente en el ambiente rural donde se ubica la pobreza nacional más lacerante.

¿Qué relación tiene la pobreza rural con la actividad económica del campo? Ante el desmantelamiento de las redes sociales tejidas bajo el modelo económico del Estado Benefactor, el mercado debería ser el encargado de procurar el incremento de la calidad de vida en la sociedad. Bajo este último modelo económico, el trabajo y los salarios son los mecanismos esenciales que la sociedad detenta para alcanzar a superar su calidad de vida. Es indudable, que asociado al trabajo se encuentra el ritmo de actividad económica: entre mayor sea el vigor de la producción es de esperarse que la demanda de mano de obra se incremente.

Precisamente en este punto, es donde puede comenzar el cuestionamiento de la actual situación macroeconómica agrícola de México: básicamente, su participación en la producción total nacional, se ha mantenido en una posición marginal que actualmente ronda 5%. De igual manera, la evolución de las exportaciones agrícolas no se ha visto magnificada por la apertura comercial y las exportaciones que de ella se esperaba obtener. Entre 1980 y 2005, las ventas al exterior aumentaron en 196 mil de millones de dólares mientras que las correspondientes a productos del campo únicamente lo hicieron en 4,500 millones de dólares. La explicación inmediata a ello se deriva de que las exportaciones mexicanas son ampliamente dominadas por los productos manufacturados, especialmente la maquila.

Directamente relacionada con la modesta actividad económica agrícola, puede señalarse el pobre crecimiento de su empleo asociado. Las cifras disponibles del IMSS apuntan que entre 1983 y 2005 los asegurados totales crecieron en 11 mi-

lones, una cifra de por sí modesta al compararla con el crecimiento de la población total en dicho periodo de tiempo. No obstante, el análisis de los asegurados al IMSS por sector de actividad económica permite afirmar que el correspondiente al campo cayó en 83 mil durante el mismo periodo de tiempo, es decir, muy por debajo del incremento total.

No es de extrañar que las remuneraciones totales de sector agrícola fueran unas de las más bajas de todos los grupos que conforman la economía mexicana: entre 1990 y 2004 pasaron de 8,423 millones de pesos a 48,532 millones, una cifra sólo superior a la de los sectores de Minería y Electricidad, gas y agua. Aún más informativa es la evidencia que proporciona la remuneración promedio: entre 1990 y 2004, no existió un sector de actividad económica que pagara menos a sus asalariados ni que hubiese aumentado en una cantidad menor dichas remuneraciones.

Como conclusión parcial, puede citarse que la situación macroeconómica de la agricultura es poco propicia para pensar que solamente por su ritmo productivo permitirá incubar progreso social a las comunidades que le conforman. En términos económicos esta evolución es consistente con la evidencia de la superficie cosechada y las subvenciones que recibe el campo. Primero, debe resaltarse la importancia económica que reviste la producción del maíz y el frijol: ambos bienes constituyeron poco más de 90 % de valor total de la cosecha de granos básicos en 2004. Desde 1990, la producción agrícola prácticamente se ha realizado con la misma cantidad de superficie sembrada y cosechada, particularmente en el maíz y el frijol.

En cuanto a los apoyos directos al campo, la información estadística oficial disponible hace patente que hasta 2004, la superficie total beneficiada exhibió una ligera caída, ello a pesar de que los montos financieros, en términos nominales, se incrementaron. Los apoyos gubernamentales al sector como PROCAMPO, ALIANZA entre otros, se han orientado hacia los productores dedicados a la exportación, por lo que al excluir a una parte importante del campesinado, su impacto en el desarrollo se ha limitado.

Cuadro 1
Apoyo al campo mexicano

Año	Recursos Millones de pesos	Superficie Miles de hectáreas	Productores beneficiados		
			Ejidales Miles	Pequeñas propiedades Miles	Otros Miles
1995	5,864	13,321.3	2,445	432	57
2004	13,810	12,902.6	2,294	382	55

Fuente: *Quinto Informe de Gobierno, 2005*, Anexo, México.

En general, la disminución de los apoyos se ha relacionado con el menor número de productores beneficiados, los cuales también manifestaron una contracción hasta 2004. Todo lo anterior parece conjugar un escenario que justifica plenamente el estancamiento de la actividad económica agrícola en México y hace que de manera natural surja un cuestionamiento a la política económica implementada durante los últimos años, política que no ha sido lo suficientemente eficiente y proactiva como para lograr aumentar de manera significativa el crecimiento económico del sector agrícola, uno de los más estratégicos para lograr aliviar la pobreza y marginación social rural. Debe apreciarse, que lograr dichos objetivos es esencial para garantizar la estabilidad económica y social de las familias campesinas, situación imprescindible para avanzar en la competencia global del nuevo milenio.

El escenario descrito permite entender las razones de la salida de mexicanos hacia el exterior, situación que tiene su aspecto positivo en la llegada de las remesas, pero exhibe el grado de dependencia que puede tener la economía mexicana en términos de consumo y desarrollo humano.

2. Remesas y migración

La migración es definida como el movimiento, de una persona o grupo de personas, de una región geográfica a través de una frontera política o administrativa, en donde las personas que cambian su residencia lo hacen deseando tener una estancia temporal o permanente en una región diferente a la de su origen (Bauer, Haisken, Schmidt, 2004: 3-48). Dado que la migración no únicamente se da entre países vecinos, la problemática se extiende para los países emisores, receptores y los de tránsito.

Como consecuencia, es importante reflexionar sobre los motivos de la migración. Es posible identificar tres tipos de emigrantes: los que buscan una oportunidad económica para establecerse en el país de destino, las personas que tratan de acceder a una economía temporalmente para incrementar su capital humano o sus ahorros, pero tienen como fin último regresar a su lugar de origen, y por último, gente que abandona su nación a causa de problemas de opresión política, étnica, religiosa o social. Es posible plantear que uno de los motivos fundamentales para emigrar a otro país es la búsqueda de una mejor calidad de vida (Cruz, Carreño y Núñez, 2007: 39-72), hecho condicionado por factores como diferencias en el ingreso per cápita o salario real de los países receptores y emisores de la migración (Todaro, 1969: 138-148; Bencivenga y Smith, 1997: 582-608).

Las discrepancias en ingresos pueden acentuarse por las diferencias en el ciclo económico de ambos países y a las redes sociales de emigrantes que previamente se establecieron en el país de destino. La existencia de estos grupos no sólo

ayuda a solventar los gastos de logística del potencial emigrante, también incrementa tanto sus conocimientos sobre el país receptor como el apoyo económico con el que dispone, situación que le permite atenuar las restricciones existentes por las políticas inmigratorias de algunos países. Un hecho general es que las concentraciones de migrantes se acentúan en los lugares con mejores sistemas de asistencia social (Borjas, 1999: 29-76). En este sentido, Bencivenga y Smith (1997: 582-508) desarrollaron un modelo que explica la dinámica entre el crecimiento, el desempleo y la migración de la población rural hacia las zonas urbanas. Los autores plantean que en las primeras etapas de crecimiento, la formación de capital en las zonas urbanas es más rápida que en las zonas rurales, ello motiva un aumento relativo de los salarios de la primer zona. Bajo esta perspectiva, en donde el ingreso esperado es mayor, existe un aumento de la migración (de zonas rurales a urbanas). El equilibrio bajo esta dinámica se puede alcanzar con la igualdad en los salarios reales, situación que en los países en desarrollo no es fácil de lograr. De acuerdo con Cruz, Carreño y Núñez (2007: 39-72), cuando el desempleo urbano crece y la economía nacional no es capaz de utilizar toda la oferta de trabajo, surge la posibilidad de que las personas busquen emigrar a otros países. Debe hacerse notar que en este proceso existe un profundo cambio estructural: la gente tiene una mayor calificación relativa cuando existió la migración del campo a la ciudad. Como consecuencia natural, es posible estimar que en esta etapa los países expulsores de mano de obra pierden parte de su acervo de capital humano.

La importancia de la migración de mano de obra calificada se ha incrementado en la internacionalización del mercado laboral, tanto por la creciente competencia de los países industrializados por captar este tipo de mano de obra (Bauer, Haisken, Schmidt, 2004: 3-48), como por la persistente inequidad global entre los países (Cheng y Yang, 1998: 626-653). En el caso de la economía mexicana se ha mostrado que el patrón migratorio ha cambiado hacia dicha esta tendencia (Chiquiar y Hanson, 2005: 239-281), situación preocupante para un país que busca elevar sus niveles de competitividad, lo cual se logra con incrementos de inversión física y de capital humano.

Por otra parte, el aumento de la migración tiene una incidencia importante en la marcha de la economía de los países relacionados con este fenómeno, en donde las fuentes europeas tradicionales de emigrantes hacia los EUA han cambiado por nuevas regiones emisoras como son Latinoamérica, África y Asia, cuya población busca un mejor nivel de vida en EUA, Canadá o la Unión Europea. Debe agregarse que la migración es acompañada de un incremento de los flujos de capital financiero hacia el país de origen, fundamentalmente por conducto de los envíos de remesas (Sana y Massey, 2005: 509-528).

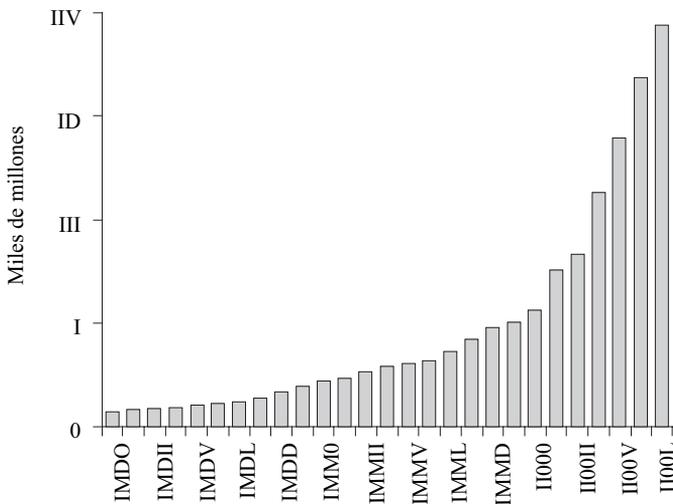
Para el caso de México es evidente que el impacto macroeconómico de las remesas es relevante: si bien el déficit de cuenta corriente muestra un comportamiento moderado, ello es atribuible a que en gran parte los resultados negativos se ven compensados por el creciente ingreso de remesas. Dentro de la creciente migración hacia EUA, la generada en México se ha consolidado como una de las más representativas. En un marco de estudio de incentivos migratorios basados en los salarios, los costos de migración y el nivel de escolaridad de las personas, se ha estudiado el fenómeno de selección de la población más propensa a migrar (Borjas, 1991: 29-76; Chiquiar y Hanson, 2005: 239-281). En el primer estudio, el autor argumenta que la población emigrante de México experimenta una selección negativa, es decir, que la población con menor educación es la que decide migrar con mayor frecuencia. Este resultado es planteado por el supuesto de que los costos de migración son constantes para toda la población y que a partir de un nivel de educación determinado, el ingreso que las personas pueden obtener en México por un mayor grado de educación es superior al ingreso que pueden percibir en EUA.

No obstante, en épocas recientes la dinámica migratoria parece haber cambiado de manera significativa. En el segundo estudio, los autores plantean un escenario donde los costos de migración disminuyen a medida que el nivel de educación aumenta, principalmente a causa de las facilidades para migrar que enfrentan las personas con un estatus académico mayor y mejor remuneración salarial. Este hecho transforma la dinámica del modelo y plantea un incentivo económico que promueve la migración de la población calificada, la cual se encuentra en posibilidad de poder percibir un ingreso superior en EUA, ello aún después de descontar los costos de la migración. El proceso descrito se encuentra acorde con otro hecho fundamental del mercado laboral mexicano: durante los últimos años las personas con mayor educación muestran tasas de desempleo más elevadas, por lo cual parte de ese capital humano podría ver la migración hacia EUA como una forma de encontrar un empleo. Además, durante los últimos veinte años han existido varias etapas de crisis y estancamiento económico, situación que ha afectado la evolución del mercado laboral y los salarios de la nación. De acuerdo con las estadísticas disponibles, el salario mínimo real ha perdido aproximadamente 50 % de su valor tan sólo en el periodo comprendido entre 1987 y 2004. De igual manera, la Oficina de Estadísticas Laborales de EUA (BLS, por sus siglas en inglés) permite observar que en 2004 los costos laborales en México representaron únicamente 11% si se les compara con los de EUA (para el sector de las manufacturas), cifra muy inferior al 25% que alcanzaron en 1975 (BLS, 2006:14-18).

Reflexionar sobre la influencia que las remesas tienen sobre el consumo y el desarrollo humano en México no es una cuestión menor, fundamentalmente por

el hecho de que la generación de ingreso de la población mexicana, especialmente de la más pobre se da por medio del empleo, variable económica y social que en los últimos años ha sido severamente castigada. En este sentido no es fortuito que la creciente migración de mexicanos hacia el mercado laboral de EUA se vea acompañado por el correspondiente incremento de las remesas que los mismos canalizan hacia la nación, cifra que en 2006 rondó los 23 mil millones de dólares. Ello confirma el aumento sistemático que desde 1980 se observaba, pero que a partir de la crisis de 1995 se ha acentuado (véase Gráfica 1), tanto por los problemas laborales y económicos antes citados como por la facilidad que ahora se tiene para realizar envíos electrónicos desde los EUA.

Gráfica 1
Remesas
(dólares)



Fuente: Banco de México.

La relevancia de las remesas queda ejemplificada por el hecho que tan sólo en 2006 dichos ingresos únicamente fueron superados por los extraordinarios recursos generados por la venta del petróleo. En términos regionales dichos ingresos son altamente significativos, particularmente para algunos estados como Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Durango, entidades en donde los hogares

tienen una cercana relación con la percepción de las remesas (Cruz y Núñez, 2005: 283-296). A nivel nacional, el CONAPO calculó que en 2002 más de 1.4 millones de hogares recibieron ingresos por remesas. Sin embargo, debe destacarse una diferencia sustancial con otro tipo de ingresos financieros que México percibe: las remesas tienen una relación con dificultades económicas, financieras políticas y sociales (Cruz, Carreño y Núñez, 2007: 39-72) en donde la ausencia de empleo de empleo y salarios elevados provoca que la gente busque emigrar hacia otro país, buscando mejorar con ello su nivel de bienestar económico, principalmente mediante el mejoramiento de su nivel de consumo. Cruz y Núñez (2005: 283-296) ya han mostrado la existencia de dichos vínculos a nivel agregado, es decir entre el CPR y las remesas. De igual forma Cruz, Núñez y Carreño (2007: 39-72) encontraron la influencia de las remesas sobre los componentes del CPR. No obstante en presente estudio se busca profundizar la prueba no sólo para el CPR y sus componentes, sino para un concepto más amplio: el desarrollo humano.

3. Metodología y datos

El análisis realizado busca probar la existencia de causalidad, y el sentido de la misma, entre los principales componentes del consumo privado (CPRNDS, CPRD), y las remesas que llegan a México. Para lograr dicho objetivo se elaboró un vector de corrección de error (VEC), en donde el procedimiento permite estudiar la causalidad a partir de series integradas de orden uno (I(1)), que además presentan cointegración, tal y como lo sugieren Liu, Song y Romilly (1997: 1679-1686); Liu, BurrIDGE y Sinclair (2002: 1433-1440); Parantab, Chandana y Derrick (2003: 510-516). Bajo este procedimiento, la información debe ser sometida a un estudio de raíces unitarias, a fin de establecer su orden de integración. Posteriormente, es necesario calcular los rezagos óptimos, utilizando para ello los criterios de información. Una vez determinado esto, se aplica la prueba de cointegración de Johansen, la cual permite comprobar tanto la existencia de cointegración como el número de las posibles combinaciones lineales que existen entre las series. El método propuesto permite superar las inconsistencias de probar la causalidad en un ambiente bivariado como: a) el sesgo cuando se omiten variables relevantes y b) el hecho de que el resultado no es confiable cuando se estiman variables no estacionarias en niveles (Liu, BurrIDGE y Sinclair, 2002: 1433-1440). La metodología descrita se sintetiza en realizar la construcción de un VEC de orden n y p rezagos

$$\Delta y_t^* = J_k^*(L)\Delta y_{t-1}^* + \Pi \Delta y_{t-1}^* + \varepsilon_t \quad (1)$$

$$J_i^*(L) = \sum_1^{k-1} J_i^* L^{i-1} \quad (2)$$

$$\Pi = \alpha\beta' \quad (3)$$

En donde las matrices β y α contienen los parámetros de largo plazo y los coeficientes de ajuste. El planteamiento busca estudiar si los parámetros de largo plazo son significativos, para lo cual se aplica la prueba de Wald sobre los rezagos del VEC, a fin de analizar si estos son significativos, y con ello, corroborar la existencia de causalidad bidireccional.

La información utilizada tiene una frecuencia anual, y abarca el periodo 1980-2006. Las estadísticas de los componentes del consumo se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Estadística, en términos reales mientras que el IDH se obtuvo de las estadísticas de la ONU, interpolando la información para obtener la información faltante. Los datos sobre las remesas son publicadas por el Banco de México y fueron llevados a términos reales utilizando el tipo de cambio fix y el deflactor del producto interno bruto.

4. Resultados

Las estadísticas establecen que todas las series bajo estudio son integradas de orden uno [1(1)]. Como consecuencia, la metodología propuesta establece la pertinencia de realizar pruebas de cointegración con el fin de determinar si las series tienen relaciones de largo plazo. Para ello es pertinente establecer el número de rezagos óptimos que tendrá el vector. En el presente análisis los criterios de información de Hatemi-J (2003: 135-137), de Akaike y Schwarz indican que el orden correcto es de cuatro rezagos para la construcción de un vector con los componentes del consumo y las remesas y de seis rezagos para el vector correspondiente al IDH y las remesas. A continuación se realiza la prueba de cointegración de Johansen, la cual sustenta la existencia de dos relaciones de cointegración en el primer caso y de una relación de cointegración para el segundo, razón por la cual se elaboran dos VEC.

En el Cuadro 2 puede observarse la existencia de evidencia estadística que señala la presencia de una relación causal entre las remesas y los dos tipos de consumo privado analizados. En primera instancia es plausible establecer que el sentido de la relación causal va de las remesas hacia CPRD y CPRNDS. En un sentido económico ello señala que la evolución del consumo en México se ve favorecido por los ingresos financieros generados por los mexicanos en el exterior. De manera

adicional, los resultados hacen posible deducir que dichos vínculos son positivos, es decir, que los incrementos en la remesas potencian las posibilidades de consumo en México, algo similar a lo estimado por De la Cruz y Núñez (2005) y De la Cruz, Carreño y Núñez (2007) de forma agregada y contemplando otro tipo de ingresos financieros foráneos como inversión extranjera directa y los generados por el turismo internacional.

Cuadro 2
Pruebas de causalidad

	<i>REM</i>
CPRD	0.0046 (+)
CPRNDS	0.0000 (+)

Las razones que permiten entender el resultado se encuentran asociadas al hecho de que varios estados del país tienen una dependencia profunda con los flujos financieros atribuibles a las remesas, principalmente Michoacán, Estado de México, Jalisco, Puebla, Distrito Federal y Veracruz. Además existe un hecho innegable, la emigración de la parte más pobre corresponde a grupos de personas que destinan la mayor proporción de su gasto a la alimentación (Cruz, Carreño y Núñez, 2007: 39-72). Dado que el ingreso de los deciles más pobres tienen un alto componente de transferencias, entre ellos las remesas, es plausible estimar que una parte de estas últimas se dirigen al consumo de alimentos y bebidas, reforzando la idea de que las remesas tienen una relación causal hacia el CPRNDS. En el caso del CPRD existe evidencia que cimientan la idea de que las remesas también incentivan a las inversiones domésticas (Zarate-Hoyos, 2004: 555-565), algo que favorece el consumo de este tipo de bienes. Por tanto, las estimaciones constituyen evidencia suficiente para entender que las remesas tienen una influencia positiva de largo plazo sobre los principales componentes del consumo privado de México.

En el Cuadro 3 puede apreciarse que el IDH también depende positivamente de las remesas, resultado que implica la influencia que las remesas tienen no únicamente sobre el consumo de los mexicanos, sino además el impacto que representa en una variable que además captura la esperanza de vida de las personas, la educación y el incremento del PIB per cápita. Ante ello, y dado que la relación es unidireccional en el sentido de las remesas hacia el IDH puede considerarse que este flujo externo termina por influir de manera significativa sobre el bienestar de los mexicanos. Por tanto, parece evidente que ante las fallas de mercado laboral nacional el hecho de que exista una creciente migración, principalmente hacia EUA, sí ha influido en la mejora del nivel de vida de las familias que reciben los recursos

económicos enviados desde el exterior bajo la categoría de remesas pero en donde lo anterior, representa una vertiente de la dependencia que tiene México de la economía norteamericana, fundamentalmente por el hecho de que ante cualquier variación negativa del ciclo económico de la potencia, la afectación se reflejará en la calidad de vida y en la perspectiva de la misma que tienen los mexicanos.

Cuadro 3
Pruebas de causalidad

	<i>REM</i>
IDH	0.0001 (+)

Conclusiones

Parece claro que la evolución macroeconómica de los últimos lustros deberá ser mejorada de manera sustancial, cuando se observa el periodo comprendido entre los años de 1980 y 2006 es palpable el hecho negativo que constituye el magro crecimiento del CPR total: únicamente 2.8% en promedio anual, es decir solamente un punto porcentual por encima de lo que creció la población en el mismo lapso. Lo anterior a pesar de que en el consumo se encuentran elementos afines a la alimentación, salud, educación, transporte y el vestido, los cuales difícilmente pueden menguar su valor de manera sistemática, pero que al no contar con un entorno macroeconómico más favorable, exhiben un comportamiento modesto como el anteriormente descrito, ello constituye un factor elemental para impulsar la migración de las personas que buscan mejores oportunidades de desarrollo para sus familias.

Con fundamento a los resultados estadísticos del estudio presentado, se puede identificar que el consumo privado en México, desagregado en bienes durables y bienes no durables y de servicios, se encuentra influenciado por los flujos que de remesas llegan al país. Adicionalmente, el análisis permite entender que la dependencia que el país tiene sobre el flujo de remesas es aún más profunda al tocar aspectos como la educación, la expectativa de vida y el aumento de su ingreso, situación provocada por la debilidad económica y la falta de creación de empleos bien remunerados en México.

En general puede apreciarse que la relación es de largo plazo y positiva, elemento que conlleva a plantear que una parte del bienestar de las familias mexicanas, muy probablemente los deciles más pobres, se encuentran favorecidas por el ingreso de dichos recursos. En este sentido, la migración de mexicanos a EUA, y el correspondiente flujo económico que de ello se desprende, constituye parte del

pilar que sostiene los patrones de consumo nacional. Evidentemente dicha situación tiene asociada una arista negativa: la dependencia que el bienestar de la población mantiene respecto a un flujo financiero que tiene su raíz en la falta de empleo y de otras condiciones sociales, económicas y políticas que les orillan a emigrar hacia terceros países, y de manera muy particular hacia EUA.

La dependencia citada sirve como referencia para afirmar la existencia de una imperante necesidad que el país tiene por resolver los problemas que motivan la migración, y con ello disminuir la dependencia que se tiene de los flujos externos y que en el caso de las remesas influyen sobre una variable asociada al bienestar de la población, es decir con un elemento vinculado a las necesidades básicas de la misma.

Referencias bibliográficas

- Bauer, T.; J. Haisken-Denew y C. Schmidt (2004). “International Labor Migration, Economic Growth and Labor Markets-The Current State of Affairs”, *RWI Discussion Paper No. 20*, Alemania, pp. 3-48.
- Bencivenga, V. y B. Smith (1997). “Unemployment Migration and Growth”, *The Journal of Political Economy*, Vol. 105, No. 3, EUA, pp. 582-608.
- Borjas, G. J. (1991). “Immigration and Self-Selection”, en J. M. Abowd y R. B. Freeman (eds.), *Immigration, Trade, and the Labor Market*, Chicago and London: University of Chicago Press, pp. 29-76.
- (1999). “Immigration and welfare magnets”, *Journal of Labor Economics*, Vol. 17, No. 4, EUA, pp. 607-637.
- Bureau of Labor Statistics (BLS) (2006). “International Comparison of Hourly Compensation Costs for Production Workers in Manufacturing 2004”, EUA, pp. 1-25.
- Chiquiar, D. y D. Hanson (2005). “International Migration, Self-Selection, and the Distribution of Wages: Evidence from Mexico and the United States”, *The Journal of Political Economy*, Vol. 113, EUA, pp. 239-281.
- Cheng, L. y P. Yang (1998). “Global interaction, Global inequality, and the migration of the highly trained to the United States”, *The International Migration Review*, Vol. 32, No. 3, EUA, pp. 626-653.
- Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2004). *Situación demográfica de México, 2004*, México: CONAPO.
- (2005). *Migración Internacional. Migración mexicana hacia EUA* (http://www.conapo.gob.mx/mig_int/03.htm), México.

- Cruz Gallegos, J. L. de la y J. A. Núñez (2005). "Determinantes externos del consumo privado en México", *Análisis Económico*, núm. 44, México, pp. 283-296.
- ; F. Carreño y J. A. Núñez (2007). "Remesas, inversión extranjera directa y turismo: algunas interrelaciones de largo plazo con el consumo privado en México", *Panorama Económico*, vol. III, núm. 5, México, pp. 39-72.
- (2008). *Crisis social de un modelo económico*, México: Editorial ITACA y Tecnológico de Monterrey.
- Fernández, J.(1997). "La política de la deuda externa del sector público", *Estudios Económicos*, vol. 12, México, pp. 133-155.
- Hatemi-J., A. (2003). "A new Method to Choose Optimal Lag Order in Stable and Unstable VAR Models", *Applied Economic Letters*, 10, Reino Unido, pp. 135-37.
- INEGI (2005). *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares*, México: INEGI.
- Liu, X.; P. Burridge y P. Sinclair (2002). "Relationship Between Economic Growth, Foreign Direct Investment and Trade: Evidence from China", *Applied Economics*, vol. 34, Reino Unido, pp. 1433-1440.
- Liu, X.; H. Song y P. Romilly (1997). "An Empirical Investigation of the Causal Relationship between Openness and Economic Growth in China", *Applied Economics*, Vol. 29, Reino Unido, pp. 1679-1686.
- Parantab, B.; C. Chandana y R. Derrick (2003). "Liberalization, FDI and Growth in Developing Countries: A panel cointegration Approach", *Economic Inquiry*, vol. 41, EUA, pp. 510-516.
- Passel, J.; J. Van Hook y F. Bean (2004). *Estimates of Legal and Unauthorized Foreign Born Population for the United States and Selected States, Based on Census 2000*, Report to the Census Bureau, Washington, DC: Urban Institute, June 1.
- Sana, M. y D. Massey (2005). "Household Composition, Family Migration, and Community Context: Migrant Remittances in Four Countries", *Social Science Quarterly*, Vol. 86, EUA, pp. 509-528.
- Todaro, M. (1969). "A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Development Countries", *American Economic Review*, Vol. 59, No. 1, EUA.
- Zarate-Hoyos, G. (2004). "Consumption and Remittances in Migrant Households: Toward a Productive use of Remittances", *Contemporary Economic Policy*, Vol, 22, No. 4, October, EUA, pp. 555-565.